

Las últimas páginas del libro se dedican a la presentación de las conclusiones generales. Se incluyen también unas tablas bibliográficas (fuentes, bibliografía pseudoisidoriana y bibliografía general), un índice de autores y un índice de fuentes (Decretales, Concilios, Capitulares carolingios y otras fuentes).

El libro de Yarza no ofrece únicamente un trabajo de carácter sistemático o expositivo. Junto a la presentación ordenada de los datos pseudoisidorianos que permiten una visión global de la posición del Obispo en la organización eclesiástica, el autor realiza un estudio crítico sobre la correspondencia entre las Falsas Decretales y la normativa precedente, aportando no pocas veces algunas conclusiones innovado-

ras. Conviene tener en cuenta que la investigación no aborda el tema de las relaciones institucionales del Obispo con los demás oficios diocesanos, salvo el caso de los corepiscopos.

Finalmente, quisiera señalar que en el primer capítulo resulta excesivo, a mi juicio, el número de citas en el texto. Algunas de ellas podrían haberse situado a pie de página para conseguir una lectura menos fatigosa. Por otra parte, se incurre en demasiadas repeticiones a la hora de mostrar el propósito fundamental del Pseudo-Isidoro: el fortalecimiento de la potestad episcopal. Ambas puntualizaciones formales no quieren desmerecer la valiosa aportación del autor a la Historia del Derecho canónico.

ANTONIO VIANA

DERECHO PENAL CANONICO

Massimo JASONNI, *Contributo allo studio della «ignorantia iuris» nel diritto penale canonico*; Milano, Dott. A. Giuffrè ed., 1983, 191 págs.

La relevancia de la *ignorantia iuris* en el Derecho canónico, es, sin duda, un claro exponente de las peculiaridades del ordenamiento de la Iglesia frente a los ordenamientos seculares. Contra el habitual criterio de estos últimos, que como norma general consideran irrelevante la ignorancia de las leyes a la hora de su exigibilidad, el Derecho Canónico toma en consideración esta posibilidad, y reconoce al hecho determinados efectos. En un ordenamiento jurídico, como es el canónico, particularmente atento a que la ley es expresión de mandatos de Dios y de

la Iglesia, que reclaman obediencia incluso en conciencia —y aunque la ley puede en algunos supuestos operar *a se*, independientemente de la ignorancia del sujeto (vid. respecto a la validez o nulidad de los actos jurídicos el c. 1045)— difícilmente podría admitirse, en principio, que quien desconoce el mandato deba obedecerlo. Y esto es especialmente notorio en sede penal, donde la atribución de imputabilidad lleva consigo la pena.

Un trabajo, por consiguiente, que se proponga arrojar luces sobre este instituto de la *ignorantia iuris* en el De-

recho Penal Canónico, tiene que ser bien acogido: por lo que este supuesto significa para todo el Derecho Canónico; y particularmente por su importancia a la hora de iluminar el estudio de la naturaleza del Derecho Penal.

El A. divide la obra en tres partes. La primera, *I Fondamenti storici*, se propone un reconocimiento de los fundamentos histórico-doctrinales de la *ignorantia iuris*.

Un primer capítulo se ocupa, en ella, de las premisas históricas y filosóficas que el A. indaga en el Nuevo Testamento (Evangelio de S. Juan especialmente), en la Patrística (S. Agustín), Boecio...; y se detiene en S. Isidoro, en quien encuentra el A., a través de la distinción *ignorantia-nescientia*, una inicial conexión de la primera con el ámbito penal (ignorancia culpable): «la opera de Isidori (...) consegna a la storia del pensiero canonistico le linee basilari dell'instituto della *ignorantia iuris*» (p. 24).

En el segundo capítulo se estudian los Libros Penitenciales, las Decretales Pseudo-isidorianas, Burcardo e Ivo de Chartres... En los Libros Penitenciales la *ignorantia* parece conquistar autonomía en el ámbito jurídico, con el rango de figura subjetiva de la responsabilidad junto al dolo y la culpa. El empeño reformador de la Iglesia Gregoriana en su aspecto de purificación de las costumbres será el motivo para que se toque el punto focal de la teoría jurídica de la publicación de la ley (Burcardo e Ivo). Y en la Escuela de Chartres se estudia la medida de la responsabilidad del sujeto en relación con el grado de conocimiento o de ignorancia.

Con Graciano y las Decretales se consolidará el sistema jurídico-canónico. Es el cap. III. Van tomando cuerpo las distinciones entre ignorancia del derecho natural y del derecho humano,

ignorancia vencible e invencible, supina, crasa... La relación entre ignorancia y voluntariedad de la acción (*nihil volitum quin praecognitum*), y su resultado en relación con la punibilidad; el juego de la buena fe, son elementos a través de los cuales en Santo Tomás y en las Decretales la ignorancia aparece como un elemento a tomar en cuenta en la valoración de la responsabilidad. Los Decretalistas, a su vez, aportan el tratamiento procesal del fenómeno.

El cap. IV, último de esta primera parte, se sitúa entre la Reforma de Trento y las aspiraciones codificadoras del s. XVIII. Para el A. se produce en este período un decisivo cambio de óptica con gran incidencia en el enfoque de la *ignorantia iuris*. Hasta el momento, desde la *sicientia Dei* agustiniana, lentamente se había pasado al deber de conocer las normas de Derecho humano (intérpretes de la Reforma Gregoriana); y de ahí al tratamiento de la ignorancia de la ley —natural, civil, canónica— en Graciano, Decretistas y Decretalistas, conceptuándose las distinciones de ignorancia de hecho o de derecho, vencible e invencible, inculpable, crasa, supina... Pero todo ello se desenvolvería en una instancia «objetivística», en torno al binomio del objetivismo gnoseológico y ético. La reforma protestante atacará la raíz de este sistema, poniendo el centro en la conciencia individual. La Iglesia reafirmará su jurisdicción de fuero interno y la legitimidad de su intervención en el ámbito del mismo, pero dejando ya un espacio de autonomía a la conciencia individual: éste será el caldo de cultivo de los sistemas medievales de moralidad (probalismo, equiprobabilismo, probabiliorismo...), todos ellos subsumibles bajo la etiqueta del probabilismo subjetivista. Y a la par, en el ámbito jurídi-

co, parece operarse un resurgimiento del objetivismo: la luz arrojada por Decretistas y Decretalistas sobre las distinciones entre fueros interno y externo favorecen ahora un mayor espacio de autonomía a lo jurídico, que da origen a un nuevo objetivismo, no teológico ni ético, sino legal. Con lo que el conicimiento de la ley deviene tema central: clave de entendimiento de todo el tema de la *ignorantia iuris* normado en el *Codex*. Este enfoque vendrá impulsado históricamente por la doctrina del *Ius Publicum*, que necesita afirmarse frente a las pretensiones del Ancien Regime de monopolizar las normativas. De donde el profundizamiento en los conceptos de promulgación y publicación, distinguiendo uno y otro, siendo el segundo el medio de dar a conocer aquellas leyes promulgadas: todo ello encaminado, en una consideración previa al hecho de la ignorancia, a evitar que esta se produzca. El apogeo de este punto vendrá dado por la codificación.

Se cierra así la primera parte. El período recorrido ha sido muy extenso. Como introducción parece un tanto desmesurado el dedicar al estudio de los fundamentos históricos más de la mitad de la obra (108 pp.). Mas por otra parte el espacio parece corto para el amplísimo arco que ha de abarcar. Necesariamente ha habido que elegir. Los hitos más importantes, en acontecimientos y autores, aparecen aludidos; y con frecuencia los datos aportados son de enorme interés. Difícil es, sin embargo, la interpretación de los mismos: y en este sentido, a mi parecer, la premura de espacio, y la dificultad del tema tratado, hacen que el trabajo adolezca de algunas generalizaciones por lo menos discutibles. Quisiera fijarme brevísimamente en alguna de ellas,

sin más pretensiones que reflejar las «impresiones» de un lector.

En primer lugar, parece «dividirse» la óptica eclesial en el tema que nos ocupa en dos períodos: uno el objetivístico y otro, impulsado por la reforma protestante, y como reacción ante ella, en que el nacimiento de nuevos sistemas de moralidad como son el probabilismo reconoce a la conciencia individual un espacio de autonomía (cfr. pp. 84-85) debidamente armonizado con lo que inapelablemente constituye la jurisdicción en el fuero interno de la propia Iglesia, y consiguientemente la legítima intervención en este ámbito (v. protestantismo). Hasta el punto de que es justamente esta especie de «metanoia» (p. 84) la que abrirá el camino de una doctrina moral nueva (sistemas probabilísticos). Francamente, me parece un tanto artificial esta división: la propia riqueza de datos aportados por el A. en la época anterior abogan justamente por lo contrario. El elemento subjetivo nunca ha estado ausente del tratamiento eclesial de los problemas morales. El que esto se articule en este momento en unos «sistemas de moralidad» no creo que de pie a una diferenciación tan radical de ambos períodos: como si el nuevo sistema —con todas sus variantes— cerrara un período anterior sin más calificable de «rigorista».

La otra impresión viene dada por el difícil tratamiento del problema de la *ignorantia iuris* en una sede no del todo diferenciada: es complejo en muchos casos, especialmente en el período tratado, distinguir claramente lo estrictamente jurídico de lo moral. No obstante la dificultad, el mismo A. reconoce en algún momento la relevancia de la decretalística medieval en esta tarea diferenciadora. Entiendo que no se puede mantener esa ambigüedad hasta

la codificación del 17: ni ésta lo soluciona definitivamente, ni hasta entonces puede darse a entender que haya sido totalmente imposible. Es este sentido, en un trabajo marcado por un título tan definido, se me antoja excesivo el espacio dedicado a la moral probabilística, con todas sus secuelas. Siendo importante, no creo que sea decisivo en un tratamiento jurídico de la materia.

La segunda parte —*La ignorantia iuris poenalis tra le due codificazioni*— estudia el tema en el CIC 17 (cap. I) y en el nuevo Código (cap. II).

Sin duda, a partir de estas páginas, el lector interesado por la dimensión jurídica del problema se encuentra más a gusto. El A. deja ver su sensibilidad para lo jurídico, y el análisis de los textos hace crecer muchos enteros el interés de la lectura.

Ambas codificaciones tienen dos lugares fundamentales de tratamiento de la *ignorantia iuris*: las normas generales y su específico tratamiento penal.

El CIC 17 clarifica, sistematizándola, la doctrina precedente. El análisis del c. 16 lleva al A. a sostener que el CIC da un tratamiento positivo a la *ignorantia iuris*: pese a su redacción negativa, o quizá precisamente por ella, puede sostenerse que es un principio de derecho sustancial que la *ignorantia iuris* en general excusa; constituyendo una excepción las leyes irritantes e inhabilitantes, obviamente como medida protectora de la voluntad negocial. La ignorancia se equipara con el error. Y ambas operan en virtud del principio de buena fe.

En definitiva, el interés jurídicamente protegido consiste en la tutela del estado subjetivo de buena fe, que, en los casos de error o ignorancia, suponen un defecto de imputabilidad, y

consiguientemente, llevan a la no punibilidad.

En sede penalística (cc. 2199 y 2202) el problema se enmarca también en el ámbito de la imputabilidad: la imputabilidad penal deviene de dolo o culpa; esta última tiene entre sus causas precisamente la ignorancia de la ley. La función atenuante de la *ignorantia solius poenae* se debe a que el agente es consciente de que quebranta una ley eclesiástica, y por tanto es sujeto de imputabilidad, aunque atenuada por cuanto la pena es un elemento constitutivo de la norma en lo que se refiere a la medida de gravedad: su desconocimiento, por tanto, debe llevar consigo una disminución de la gravedad subjetiva de la infracción. Finalmente, el c. 2229 recogerá —siempre sobre la base del punto de vista de la imputabilidad moral— los distintos supuestos de ignorancia —culpable o no, crasa, supina...— en relación con su relevancia.

El nuevo Código mantiene la continuidad en dar relevancia al fenómeno de la *ignorantia iuris*: la atención a la conciencia es una característica permanentemente individuante del derecho de la Iglesia respecto a los derechos de los ordenamientos seculares (p. 140).

Sin embargo, el Código nuevo supone, para el A., un «radicale *mutamento di rotta*», tendiendo a privilegiar «una impostazione oggettivistica della figura del *crimen*, sfumando l'intima natura psicologia di imputabilità» (página 127).

En sede de Normas Generales, analiza el A. el nuevo c. 15, que frente al antiguo c. 16 ofrece dos variantes que ponen de relieve el nuevo enfoque que objetizante: se habla de *no impedire efficacia* donde antes se decía *no excusa* (§ 1); y es suprimido el *generatim* (§ 2) del antiguo c. en favor de un

criterio de certeza: mayor objetivismo por consiguiente.

Esta evolución «objetivizante» vendría confirmada por el nuevo c. 1045 (frente al antiguo 988): la ignorancia de irregularidades e impedimentos *no exime* (antes, *no excusa*).

Pero lo que, en los textos mencionados, se podría deducir de pequeñas variantes literales, en sede penal aparece como «decisamente innovativo» (p. 144). El propio tít. del nuevo L. VI supone para el autor un primer fundamento a su argumento: *De sactionibus*, en lugar del antiguo *De delictis et poenīs*: lo que en materia de ignorancia va a suponer apartarse de un tratamiento directo del delito, y consiguientemente un corrimiento de la óptica de la imputabilidad. La *ignorantia iuris* devendrá, pues, una figura estructuralmente distinta: no una modalización de la imputabilidad, sino de la sancionabilidad. ¿Cuáles pueden ser las razones de este cambio de enfoque? Para el A. dos aparecen como fundamentales: la voluntad de reducir al mínimo el aparato normativo, y el deseo de dar al Derecho Penal un sentido prevalentemente pastoral (p. 144s).

En consecuencia, el tema de la *ignorantia* se tratará principalmente en el tít. *De subiecto poenalibus sanctionibus obnoxio* (cc. 1321 y sobre todo 1323).

En el c. 1323 («*no queda sujeto a ninguna pena quien... ignoraba*») se fija el principio general: la ignorancia se configura, no como un momento de la teoría general de la imputabilidad («de ningún modo se imputa la violación de una ley que se ignora...», según el antiguo c. 2202), sino como una condición de *no punibilidad*.

El c. 1321 por su parte ofrece también una perspectiva inmediatamente sancionadora (*nemo punitur nisi...*); a la vez que conecta la imputabilidad con

el dolo o la culpa, pero sin mencionar en esta última la ignorancia.

Confirmarían además este cambio los nuevos cc. 1324 y 1325: donde el antiguo 2218 fijaba la norma de la *aequa proportio* (tanto mayor el conocimiento, tanto mayor la pena, y viceversa), en el nuevo CIC se restringe máximamente el espacio de discrecionalidad del juez en la valoración de la relevancia de la ignorancia.

Hasta aquí el análisis, con apuntes sobre el trasfondo. La parte IIII —*La ignorantia iuris poenalis nella coerenza sistematica del Diritto della Chiesa*— tratará de ofrecernos una reconsideración general de los supuestos normativos en el contexto unitario de la teoría del delito.

Se pone de relieve que, pese a cualquier cambio de óptica, la peculiaridad del derecho penal canónico sigue en pie. Para ello se recuerdan las instituciones de la *aequitas* y la *legalidad*; y se confronta la doctrina penal canónica con las escuelas positiva y clásica del derecho penal. La conexión delito-pecado, y los valores de orden trascendente que subyacen en cualquier tratamiento canónico de la vida de la Iglesia hacen que donde los ordenamientos seculares se mueven en la dialéctica valor de la libertad-orden social, el derecho canónico mantenga firme el unitario punto de referencia penalístico que muestra la centralidad absoluta de la persona humana. Ahí incide la *ignorantia iuris*: si la punibilidad depende principalmente de una responsabilidad de orden moral y personal, representando el sujeto siempre el nervio del sistema, es obvio que el conocimiento de las normas y los valores por ellas defendidos, tenga una relevancia singular. Ninguna razón social o de interés público podrá conducir al principio de inexcusabilidad en la esfera canónica;

o a aquella presunción de conocimiento sobre la que el estado moderno ha montado la certeza del propio ordenamiento jurídico.

El desplazamiento de la disciplina de la *ignorantia iuris* de la categoría de la imputabilidad a la de la punibilidad no supone un cambio de óptica para el A., aunque aparentemente podría dar pie a descubrir un obsequio a la certeza y seguridad jurídica, en perjuicio del elemento subjetivo.

Tal conclusión supondría desconsiderar el sustrato fundamental del Derecho penal canónico sobre el que cualquier reforma sigue apoyándose.

En este sentido aventura el A. una hipótesis interpretativa del fenómeno: el CIC 83 aparece dictado por razones de índole pastoral, en el intento de formular un Derecho— penal en nuestro caso— que no se proponga ser una acrítica recepción de los ordenamientos seculares, sino el fruto de una reflexión original sobre la naturaleza propia y exclusiva de la Iglesia. Consiguientemente, una Iglesia que quiere alejarse de la vieja imagen de Iglesia del Derecho, debe limpiar —al menos cuantitativamente— la frondosidad del antiguo árbol del Derecho penal canónico, pero sin sustituir el tronco representado por la sanción (la plasticidad de la imagen es mérito del autor: p. 165. La expresión «aventurar una hipótesis» es también del mismo). Pero una sanción que, diferencia de la concepción secular, tiene una propia especificidad: no mira a la pura restauración del orden social o a la recuperación del sujeto en el conjunto social, sino que aparece en su típica función y destinación espiritual: queriendo probablemente poner de relieve el sustrato de la Iglesia de la caridad.

En el Derecho canónico, pues, la *ignorantia iuris* se presenta como una

moderación del principio de legalidad: la certeza y seguridad jurídica que éste protege debe conjugarse con el orden sustancial en el que la condición y circunstancias del agente deben pesar en la decisión del juez. La Iglesia debe buscar la certeza, pero sin separarla de la justicia (p. 168). Lo cual se realizará, no suspendiendo la aplicación de la norma (supuesto de la *aequitas*), sino refiriéndose a una norma que, respetando el principio de legalidad, incluye en sí misma la previsión de un elemento cual es la situación subjetiva de *ignorantia* que impediría la aplicación de la sanción: no suspende la sanción sino que varía el supuesto, haciéndolo salir del ámbito del delito tipificado.

Un último capítulo de esta parte tercera pone de relieve, de nuevo y conclusivamente, la distancia óptica de los ordenamientos seculares y el canónico. Mientras en aquellos la relevancia de la *ignorantia* es sólo excepcional, siendo norma general la presunción de conocimiento —en favor de la certeza jurídica—, el canónico, en cambio, tiene como norma primera la relevancia de la *ignorantia* —y sólo excepcionalmente su inexcusabilidad— al mirar directamente a la persona, ya que la norma canónica tiende al fin supremo espiritual de la «salus animarum». «Si potrebbe dire che l'ordinamento canonico rifiuta di pagare il costo della certezza, negli stessi termini in cui gli statuti moderni non sono disposti a pagare il costo della giustizia sostanziale, a scapito della certezza» (p. 178). Lógica formalística en base a la necesidad social (en el Estado) frente a primacía del sujeto y prevelancia de la justicia sustancial (Canónico).

De este modo el Derecho canónico armoniza lo que pudiera parecer antitético: el Derecho canónico penal se edifica sobre un principio de antijuri-

dicidad formal y material al mismo tiempo. Formal, en cuanto al ilícito proviene de la ley positiva tipificante; material, porque el ilícito no se reduce a la abstracción del enunciado legal, sino que asume un contenido y un valor sustancial, consistente en la lesión de intereses *lato sensu* protegidos por el ordenamiento. Compatibilidad y mutua interacción que resultan de la absoluta prioridad de las fuentes del derecho divino, natural y positivo, que inciden en la validez de la norma codificada y en la praxis judicial.

La primacía, pues del *ius divinum*, es la clave de lectura de la nueva legislación: primacía que respetando la antijuridicidad formal, entronca, en su interpretación y aplicación de la norma, la antijuridicidad material, haciendo prevalecer la valoración sustancial: importa saber, en definitiva, qué ha sido lo que verdaderamente ha sucedido al infringir una norma: y en este hecho ha de contar el conocimiento y voluntad del agente, es decir, la concurrencia o no —y su posible culpabilidad— de la *ignorantia*.

Las dos últimas páginas las ocupa el A. en valorar la nueva legislación como traducción en lenguaje canonístico de las indicaciones del Concilio Vaticano II: la valoración de esas conclusiones propuestas por el A. las dejo al lector. Yo me he perdido.

De todo lo anterior, en un intento —indudablemente subjetivo— de valorar el trabajo, se me ocurren las siguientes proposiciones.

Afronta el A. con decisión los temas importantes de la materia: legalidad, antijuridicidad material y formal, seguridad jurídica y justicia del caso concreto, punibilidad e imputabilidad... Quizá en torno a estos elementos está lo más sugerente del libro. En efecto, la armonía entre antijuridicidad mate-

rial y formal —según la terminología preferida por el A.— que intenta el Derecho canónico, ha sido una característica permanente de la que es deudora toda la evolución penalística, incluso secular.

Quisiera notar, sin embargo, en este punto, algo en lo que corremos el riesgo de desviarnos los canonistas: y es que, en el empeño de acentuar lo específicamente canónico —y ciertamente la historia y la doctrina dan suficientes argumentos para ello—, podemos enjuiciar los ordenamientos seculares (pensamos ahora en lo penal) acentuando sus principios inspiradores no tanto como fruto directo del estudio de sus instituciones, es decir, desde las bases de una recta teoría general deducida, cuando desde los propios del Derecho canónico, induciendo por oposición —y resaltando ésta— los del derecho secular. En este sentido me parece excesivamente rigurosa la calificación del derecho penal secular como formalista, sin más, cuando en su seno —y quizás justamente gracias al derecho canónico— hay también notables intentos de llegar a la justicia del caso concreto, es decir, a la justicia material. ¿Quién pone en duda que —aunque desde puntos de partida muy discutibles— el hecho de que la escuela positiva, por ej., ha supuesto en este punto un notable progreso en la ciencia penal a la hora de considerar las circunstancias que concurren en el sujeto delincuente?

Otro punto delicado es el uso del término «pastoral»; y más todavía cuando aparecen de algún modo enfrentadas expresiones como «Iglesia del Derecho» e «Iglesia de la Caridad». Las dos últimas décadas han sido fecundísimas en el tratamiento de este adjetivo, y su relación con lo jurídico; mejor dicho: y su implicación en y con lo jurídico. En algunos momentos el trabajo

que comentamos no se hace eco de estas investigaciones, y roza de nuevo el tópico del enfrentamiento con el Derecho. En este sentido no puede acen- tuarse hasta tal punto la consideración individual de la persona, que resulte de ello una irreconciliabilidad entre la búsqueda del bien común y el bien individual: creo que esto debe tenerse en cuenta a la hora de entender la «seguridad jurídica» en el ordenamiento canónico. Es justamente la búsqueda del bien común —la «tranquillitas ordo»— una de las más nobles tareas *pastorales* que tiene encomendado el derecho canónico: y ahí juega un papel importante la seguridad y certeza jurídica, que también en el derecho penal debe tener necesariamente cabida. No se olvide que el Derecho penal —por supuesto, siendo inmensas las cautelas que el pastor debe tomar a la hora de recurrir a sus elementos (véase el antiguo c. 2214)— no es «dirección espiritual».

Una última reflexión me viene sugerida principalmente por la lectura de la II parte. Ese cambio de óptica en el tratamiento de la *ignorantia iuris* (de la imputabilidad a la punibilidad) entiendo que puede ser observado también desde otras claves de lectura. Y una de ellas es la distinción entre la teoría y la técnica jurídica (en este caso, la técnica codificadora). Entiendo que ello podría dar nuevas luces al fenómeno acertadamente puesto de relieve por el A. En este sentido, una nueva codificación, impulsada —entre otras— por la pretensión de reducir las definiciones y explicaciones más propias de la ciencia que de la actividad legislatora daría lugar a poder seguir entendiendo —también yo «aventuro la hipótesis»— la ignorancia en el ámbito de la culpa jurídica (§ 2 del c. 1321) aunque esta referencia no apa-

rezca expresamente: ¿no sería, cabalmente, uno de los supuestos de omisión de la debida diligencia el no poner los medios adecuados para el conocimiento de la ley? ¿Por qué no entender que el «no queda sujeto a pena» (c. 1323) o «queda sujeto» (c. 1321 § 2) son una opción técnica de claridad literal, sin necesidad de enfrentar «imputabilidad» y «punibilidad»? Véase en este sentido, por ej., el c. 1330, en el que se soluciona una cuestión ampliamente debatida en la doctrina post-17; en lo sucesivo, la percepción de hecho (no es suficiente la perceptibilidad) será lo determinante para «considerar» consumados determinados delitos. El legislador no entra en mayores profundidades; al efecto de sancionar o no, ofrece un criterio seguro, totalmente formal. ¿Impide eso otras valoraciones morales? Evidentemente no. Pero la figura *jurídica* del delito es *positiva*: responde a un tipo establecido por la norma, tipo elaborado por el legislador. El Derecho Penal no trata de llegar «al fondo» del asunto: se queda en la dimensión jurídico-positiva. Esto puede iluminar a su vez la opción redaccional del nuevo CIC: «puede ser castigado», «será castigado», «no queda sujeto»..., no suponen necesariamente obviar el tema de la imputabilidad —para el que en otros momentos se ofrecen elementos suficientes— sino optar, mirando al castigo, por un criterio objetivo y claro que impida la excesiva subjetivización de la actuación del juez o superior, o la ansiedad del delincuente en el caso de la pena *latae sententiae*. Creo que el mismo A. ponía esto de relieve cuando afirmaba que «il nuovo inquadramento sistematico della *ignorantia iuris* tenda a privilegiare una impostazione oggettivistica de la figura del *crimen*» (p. 127). Este «objetivismo» no desprecia el tema de la imputabilidad; simple-

mente ofrece criterios claros y determinantes para que ésta tenga su eficacia en sede de punibilidad.

Cuando el c. 221 expresa tan claramente un derecho fundamental, la claridad del L. VI —no tan congruente en otros puntos: c. 1399, proliferación de penas indeterminadas— debe ser una lógica consecuencia: para que aquél enunciado no se quede en un deseo.

Estas son algunas reflexiones sugeridas por la lectura, atenta y repetida, de esta interesante obra. Como decía al principio, un instituto como el de la

ignorantia iuris «tan canónica», merece estudios de esta índole que pongan de relieve, no tanto las diferencias —aunque evidentemente también— cuanto las específicas riquezas del ordenamiento canónico. Me queda la duda de las dos últimas páginas. Habla el A. de «profundas innovaciones» movidas por las reflexiones precedentes. Duda que me gustaría ver resuelta en futuros trabajos de M. Lassoni, sin duda interesantísimos a juzgar por las páginas que comentamos.

ANGEL MARZOA

CORRESPONDENCIA DIPLOMATICA

Vicente CÁRCEL ORTÍ, *Correspondencia diplomática del Nuncio Amat* (1833-1840), en Colección «Documentos para la historia de las relaciones Iglesia-Estado en la España del siglo XIX», serie I «Correspondencia diplomática de los nuncios en España», vol. V (Pamplona, Euns, 1982), LXXIII + 374 págs., 6 láms.

En cuidada edición, nos brinda V. Cárcel la oportunidad de conocer la correspondencia del nuncio, monseñor Luigi Amat di San Filippo e Sorso, arzobispo titular de Nicea y futuro cardenal presbítero de «Santa Maria in via». Gestión diplomática poco célebre, mas no por ello insignificante. Junto a los escritos de «memorias» o de «diarios» de personalidades ilustres, la documentación de correspondencia conserva siempre algo insustituible que se deriva del pulso vivo de quien redactaba traduciendo a letra impresiones y observaciones siempre valiosas para cualquier contemplador de la historia. Pero no es sólo esto, la documentación de los nuncios entraña otro interés particular.

Apenas habrá quien desconozca el prestigio indiscutible que corresponde a la Santa Sede en el panorama de las relaciones internacionales, fruto de una experiencia multiseccular desarrollada en íntimo contacto con los pueblos del orbe y, más particularmente, con los de Europa. Las diversas inflexiones históricas han sido causa —o tal vez sólo ocasión— del surgir de nuevos modos de diálogo, de nuevas técnicas y sensibilidades, que la diplomacia eclesiástica —la más antigua de cuantas hoy existen— ha ido incorporando vitalmente, casi —diríamos— biológicamente.

Cuando al ocaso del «ancien régime» surge —tras un proceso de gestación especialmente observable en la segunda mitad del XVIII— una nueva